



Investigaciones Socio Históricas Regionales  
Unidad Ejecutora en Red – CONICET  
Publicación cuatrimestral  
Año 3, Número 6, 2013

## EL TERCER GOBIERNO DE PERÓN Y LA FRACTURA DE LA CLASE DOMINANTE

BAUDINO, Verónica (IDIHCS-CONICET)

SANZ CERBINO, Gonzalo (IEALC-CONICET)

---

### Resumen

En los años que transcurrieron entre el golpe de estado de 1955 y el retorno de Perón en 1973, la Argentina atravesó una de sus más profundas crisis. La acumulación de capital se encontraba estancada, la clase dominante dividida y ninguno de los muchos gobiernos (y regímenes políticos) que se sucedieron consiguió revertir la situación. A su vez, en 1969, se inició un proceso de movilización social y radicalización política que puso en peligro el sistema en su conjunto. Uno de los aspectos menos estudiados de este período es la intervención política de la clase dominante. En este artículo nos proponemos avanzar sobre este problema, abordando las estrategias de las diferentes capas de la burguesía industrial y agropecuaria frente a la apertura democrática y el retorno de Perón. Tomaremos como observables a las corporaciones empresarias, sus posicionamientos, sus alianzas y sus disputas internas.

**Palabras claves:** Peronismo; Transición democrática; Burguesía industrial; Burguesía agraria; Corporaciones empresarias

### PERÓN THIRD GOVERNMENT AND THE BROKEN OF RULING CLASS

#### Abstract

*In the years that passed between the coup d'etat of 1955 and the return of Perón in 1973, the Argentina went through one of its deepest crises. The accumulation of capital was stagnant, the divided ruling class and none of the many Governments (and political regimes) that followed managed to reverse the situation. At the same time, in 1969, began a process of social mobilization and political radicalization that confront the system as a whole. One of the least studied aspects of this period is the political intervention of the ruling class. In this article we intend to move forward on this issue, addressing the strategies of the different layers of the industrial and agricultural bourgeoisie against the democratic opening and the return of Perón. We will take as observable corporate entrepreneurs, their positions, their alliances and their internal squabbles.*

**Keywords:** Peronism; Democratic transition; Industrial bourgeoisie; Agrarian bourgeoisie; Interest Groups

Recibido con pedido de publicación 26/09/2013
Aceptado para publicación 30/10/2013
Versión definitiva recibida 15/11/2013

**E**l comportamiento de las corporaciones empresariales en Argentina se reorientó en la etapa post Cordobazo. La insurrección popular de mayo de 1969 provocó una crisis política de tal magnitud que obligó a la dirigencia política a adoptar medidas que contemplaran parcialmente ciertos reclamos del movimiento obrero para evitar desbordes mayores. La imposibilidad de contener la crisis abierta y el temor a la radicalización de las masas obligó a la Revolución Argentina a seguir un camino diferente del ideado por sus representantes. La crisis de régimen que resultó en la salida de Krieger Vasena primero y Onganía después, abrió paso a negociaciones en pos del retorno del peronismo como forma de restablecimiento del orden alterado. El rumbo elegido llevó a realineamientos y cambios de estrategia de las corporaciones agrarias e industriales, que no han sido abordadas en profundidad en la bibliografía existente. Los trabajos clásicos sobre el retorno del peronismo, que se ocuparon de los aspectos políticos y económicos de la transición, no se han detenido en la especificidad de la cuestión corporativa.<sup>1</sup> Otros trabajos, que si abordaron la intervención de las corporaciones empresariales en este período han sintetizado las líneas generales, sin una reconstrucción minuciosa.<sup>2</sup> La bibliografía específica sobre corporaciones empresarias, por otro lado, al centrarse en estudios de caso no avanzó en la reconstrucción de los movimientos de conjunto.<sup>3</sup> Y por último, quienes han intentado dar cuenta de los alineamientos de las alianzas sociales en términos más generales, no se detuvieron en las particularidades del proceso, perdiendo de vista elementos significativos.<sup>4</sup> Así, la participación de la burguesía en el retorno del peronismo es reducido a la Confederación General Económica (CGE), histórica aliada de Juan Domingo Perón. En caso de admitir otros apoyos al tercer gobierno peronista, como los de la Unión Industrial Argentina (UIA) o Sociedad Rural Argentina (SRA), los reducen a mero oportunismo, cuando la evidencia empírica indica un proceso mucho más complejo. Por esa razón, consideramos necesario reconstruir el camino recorrido por las corporaciones empresariales para entender su confluencia en el peronismo,

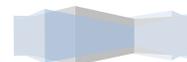
---

<sup>1</sup>De Riz, Liliana. *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*. Hyspamérica, Buenos Aires, 1987; Di Tella, Guido. *Perón-Perón, 1973-1976*. Hyspamérica, Buenos Aires, 1985.

<sup>2</sup>Sidicaro, Ricardo. *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2002; Peralta Ramos, Mónica. *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. FCE, Buenos Aires, 2007.

<sup>3</sup>Palomino, Mirta. *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*. CISEA-GEL, Buenos Aires, 1988; Palomino, Mirta. *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*. CISEA, Buenos Aires, 1989; Schvarzer, Jorge. *Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudio desde dentro para explorar su relación con el sistema político*. CISEA, Buenos Aires, 1990; Brennan, James. "Industriales y 'bolicheros': la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976". *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, Tercera Serie, N° 15, 1er. Semestre de 1997.

<sup>4</sup>O'Donnell, Guillermo. "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976". *Catacumbas*. Prometeo, Buenos Aires, 2008; O'Donnell, Guillermo. *El estado burocrático autoritario*. Prometeo, Buenos Aires, 2009; Acuña, Carlos. "Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955-1983)". *Realidad Económica*, N° 138, 1996.



que aparece como la opción estratégica más apropiada para resolver la crisis hegemónica que se profundizaba.

Las dos décadas que precedieron al tercer gobierno peronista se distinguieron por el incesante recambio de regímenes (militares y democráticos), personal político y planes económicos, atravesados por las persistentes luchas de la clase obrera y una tendencia de ésta a salirse de los marcos institucionales que proponía la burguesía para su contención. El derrocamiento del segundo gobierno peronista en 1955 evidenció una crisis económica producto de las debilidades del capitalismo argentino (crisis de acumulación), seguida por una crisis hegemónica.<sup>5</sup> Los altos niveles de renta diferencial<sup>6</sup> que permitieron al gobierno peronista erigirse como árbitro entre las dos clases fundamentales, burguesía y proletariado, al conceder un marco propicio para compensar sus dificultades para reproducirse, quedaban en el pasado. La incapacidad de la burguesía para restablecer su pleno dominio social ocupaba el centro de escena.

La Revolución Argentina constituyó un intento de relanzar la acumulación de capital, dirimir las disputas inter-burguesas (correlato político-corporativo de la exacerbación de la competencia económica), y neutralizar al movimiento obrero. La restauración de la plena hegemonía fue su objetivo. En un primer momento incluso pareció haber cumplido ciertas metas, elevando los indicadores económicos y contentando a la mayoría de las fracciones de la burguesía, previa represión de las expresiones político-sindicales de la clase obrera y la pequeña burguesía.<sup>7</sup> No obstante, los planes que derivaron en la concentración y centralización de la economía, la baja de salarios y el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores finalmente eclosionaron. Con el Cordobazo, y sus réplicas, emergió una nueva alianza social que reunía a fracciones del proletariado y la pequeña burguesía que encarnaron las tendencias insurreccionales, enfrentando mediante la acción directa, al régimen y al Estado.<sup>8</sup> En principio, esta fuerza era minoritaria. Estas capas iniciaron un proceso de radicalización política, con el que creció el ascendiente de los partidos de izquierda y las organizaciones armadas, que confluyendo con un sector del movimiento obrero. Las dos estrategias burguesas en disputa, liberal y reformista, mostraron su debilidad para encausar los antagonismos de clase. Así, a partir del Cordobazo vemos desplegarse tres alianzas: la liberal, la reformista y una tercera que asumía características revolucionarias. La emergencia de esta última, más allá de su insipiente, obligó al ensayo de soluciones por parte de la burguesía para bloquear su desarrollo.

El proceso abierto forzó al gobierno militar a dar un giro en sus políticas, que comenzaron a orientarse en función de la concreción de ciertas concesiones

<sup>5</sup>Los distintos niveles de crisis han sido analizados por varios autores, entre los que se destaca O'Donnell, *El Estado...*, op. cit., pp. 37-59.

<sup>6</sup>Iñigo Carrera, Juan. *La formación económica de la sociedad argentina*. Imago Mundi, Buenos Aires, 2007.

<sup>7</sup>O'Donnell, *El Estado...*, op. cit., pp. 111-151.

<sup>8</sup>Los fundamentos de esta caracterización han sido expuestos por varios autores, entre los que se destacan: Portantiero, Juan Carlos. "Clases dominantes y crisis política en la Argentina". Braun, Oscar. *El capitalismo argentino en crisis*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1973; Marín, Juan Carlos. *Los hechos armados. Un ejercicio posible*. La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003; Balvé, Beba y Beatriz Balvé. *El '69. Huelga política de masas*. Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005.

hacia la clase obrera, como forma de contención de las tendencias insurreccionales. A su vez comenzó a tejerse un cambio de régimen, la restauración democrática que, a diferencia de los recambios políticos del período anterior, hubo de permitir la participación del peronismo (fuerza política mayoritaria proscripta desde el golpe militar de 1955) y el retorno al país de su líder. La secuela más importante fue la decisión de Onganía de desplazar a Krieger Vasena de su puesto y anunciar la apertura del “tiempo social”, habilitando la discusión sobre aumentos salariales y otras concesiones, como la Ley de Obras Sociales. La inflación volvió a la palestra y se acentuaron los cuestionamientos de distintas fracciones de la burguesía. Al calor de la suba de precios, se desató nuevamente la puja por mejorar los salarios, acompañada por una reactivación sindical que empujaba a la CGT hacia la lucha económica. Las internas en las FF.AA. se reabrieron. Onganía fue depuesto por un golpe interno un año después del Cordobazo, y su sucesor, Levingston, duró en el cargo apenas unos meses. Un nuevo golpe interno, en marzo de 1971, puso al frente del Ejecutivo a Alejandro Agustín Lanusse, quien sin más aire para resucitar el régimen, abrió el proceso de transición democrática que dos años después pondría al peronismo nuevamente en el gobierno.

### **Cambio de rumbo**

La crisis política abierta tras el Cordobazo y los planes para campearla convulsionaron a las corporaciones agropecuarias e industriales. Nada quedó tal cual estaba, ya que asistimos a la reorientación general de los comportamientos de las diferentes fracciones de la burguesía. En el presente apartado nos centraremos en los virajes estratégicos y realineamientos que se produjeron en el campo de la burguesía entre 1969 y el retorno del peronismo.

La Confederación General Económica se constituyó en la vanguardia de una alianza que resurgiría de las cenizas. Entre 1966 y 1969 la alianza reformista quedó desarticulada y sus componentes adaptaron su comportamiento a los nuevos tiempos. En efecto, la CGE recién después del estallido de mayo de 1969 impugnó globalmente el programa económico de la Revolución Argentina. Su balance del Cordobazo, que coincidía con el de la Confederación General del Trabajo (CGT), cargaba las tintas sobre la gestión de Krieger Vasena, adjudicando la explosión social a la política económica “liberal”, “extrajerizante” y carente de “contenido social” promovida por el entonces ex ministro.<sup>9</sup> La crítica se hizo extensiva al sucesor de Krieger Vasena, Dagnino Pastore, denunciando que ponía la estabilidad monetaria como “fin primordial y a cualquier costo”.<sup>10</sup> Como principal problema ubicaban el “proceso de concentración en todos los órdenes y [el] desnivel en la distribución de ingresos entre regiones y sectores [que] se agudiza”. Esta política económica sería la causa central de los estallidos sociales.

El plan alternativo para revertir la crisis ocasionada por la política de Krieger Vasena, que prefiguraba el “Pacto Social” implementado en 1973, ya había sido esbozado poco después del Cordobazo, en junio de 1969. En esa

---

<sup>9</sup>O'Donnell, *El estado...*, op. cit., p. 235; Brennan, op. cit., pp. 131-132.

<sup>10</sup>*Cronista Comercial*, 13/1/1970.



oportunidad, en medio de la crisis gubernamental, la CGE llamó a un “diálogo institucional con la participación de las entidades representativas”.<sup>11</sup> Apuntaban, por un lado, a acaudillar a ciertos sectores de la burguesía nacional que se nucleaban por fuera de la entidad; y por otro, a atraer a su campo a la CGT. El Cordobazo abrió una peligrosa brecha entre burguesía y proletariado, y la confluencia con la CGT prometía cerrarla. El proyecto reformista se presentaba entonces, no solo como una alternativa sectorial para las empresas pequeñas y medianas, sino como expresión de un interés general de la nación. Resultaba imperioso implementar una política económica y social alternativa, para conjurar el fantasma de los enfrentamientos sociales.

El golpe interno que depuso a Onganía, en junio de 1970, marcaba la profundidad de la crisis de régimen. Se abría en el horizonte la posibilidad de una apertura democrática, y esto aceleró las negociaciones entre fuerzas políticas y corporativas para preparar ese proceso. En este marco, se acentuó la confluencia entre la CGE y la CGT. En julio de 1970, delegados de la CGT participaron de la Reunión Regional del Noroeste del Congreso Nacional de la Economía organizado por la CGE. Allí, el secretario regional de la CGT, Salvador Avallay, expresó las coincidencias de la central obrera con el diagnóstico del titular de la CGE, José Ber Gelbard, sobre la situación socio-económica.<sup>12</sup> A partir de ese momento, representantes de ambas entidades comenzaron a reunirse periódicamente para estudiar en conjunto los problemas económicos y sociales del país.<sup>13</sup> A su vez, ambas entidades comenzaron a hacer pública la confluencia, con muestras de solidaridad como el repudio de la CGE al asesinato del dirigente gremial José Alonso.

La coincidencia en el terreno corporativo de la CGE y la CGT era la primera manifestación de la resurrección de la alianza reformista, relegada a posiciones marginales en los años previos. En el terreno político, el lanzamiento de “La hora del pueblo” ponía nuevamente en carrera al peronismo para asumir la dirección de esa alianza, y de la transición democrática que comenzaba a abrirse paso. En sus objetivos estratégicos coincidía con los planteos defendidos en el plano corporativo por la CGE y la CGT. Así quedó plasmado en septiembre de 1972, cuando el grueso de las fuerzas políticas suscribieron el documento “Coincidencias programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos”, elaborado por la CGE y la CGT, que plasmaba la política que de la mano de ambas corporaciones implementaría el gobierno peronista en 1973.

El programa económico promovido por la CGE y la CGT estaba asentado en dos pilares: expandir la capacidad adquisitiva de la población mediante una mejor distribución del ingreso, y proteger e incentivar a la industria nacional. Esas eran las bases del proyecto que agitaba la CGE, cada vez más claramente asociado al retorno del peronismo. Se buscaba de esa manera, ofrecer una alternativa política atractiva para los sectores sociales que se radicalizaban y comenzaban a romper los lazos ideológicos que los ataban a la clase dominante. Era el plan de contingencia para reencauzar institucionalmente el proceso que se había abierto tras el Cordobazo. Sin

<sup>11</sup> O'Donnell, *El estado...*, op. cit., p. 236.

<sup>12</sup> *La Nación*, 12/7/1970.

<sup>13</sup> *La Nación*, 14/8/1970.

embargo esta propuesta política no era compartida aún por todas las fracciones de la clase dominante. Por esa razón, el período que se extendió entre 1969 y 1973 se caracterizó por una profunda fragmentación al interior de la burguesía, que se expresaba en dos propuestas que chocaban entre sí: la salida reformista, propuesta por la CGE, y la profundización del camino reaccionario y represivo, que postulaban la Unión Industrial o la Sociedad Rural.

Dentro de la UIA, la puja entre reaccionarios y reformistas activó disputas intestinas que enfrentaban a la dirección, compuesta por los capitales más grandes a escala nacional que podían beneficiarse de ciertos grados de apertura comercial por la posibilidad de importar bienes de capital, y a una base de capitales mucho más débiles, que demandaban protección. Entre 1966 y 1969 había primado la estrategia de los capitales grandes, plasmada en la permanencia de la UIA en ACIEL<sup>14</sup>, que respaldó el programa de Krieger Vasena. Tras el Cordobazo, esta línea siguió siendo dominante, aunque al poco tiempo comenzaron a aflorar los cuestionamientos de los capitales más débiles que a la larga terminaron imponiéndose, forzando la retirada de ACIEL.

La insurrección en Córdoba modificó la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Aunque tibiamente, el gobierno militar comenzó, a partir de 1969, a realizar algunas concesiones al movimiento obrero para reencauzar la situación. La UIA, al igual que ACIEL, comenzó a impugnar cualquier atisbo de “cambio de rumbo”. La crítica cuestionaba el acercamiento al reformismo, calificado como “demagogia”. Se objetaban los aumentos salariales y del gasto público, que generaban inflación y amenazaban la estabilidad conquistada en 1967. También sancionaba el “intervencionismo exagerado que limita, cuando no anula, la iniciativa privada, principal motor [del] progreso”.<sup>15</sup> A ello se sumaba “la aplicación de criterios abiertamente discriminatorios contra las inversiones extranjeras”, que diagramaban un cuadro que juzgaban “hostil a la inversión y a la empresa privada como tales.”<sup>16</sup> A su vez, la UIA exigía intensificar la represión en los conflictos sindicales y saludaba el accionar contrainsurgente de las FF.AA. frente al accionar guerrillero.<sup>17</sup>

Nada más alejado de la estrategia esbozada por la CGE, que buscaba, en este mismo momento, consolidar su alianza con la CGT. Su posición ante los aumentos salariales llevaba a la UIA a confrontar abiertamente con el programa propuesto por el tándem CGE-CGT, y por extensión, con el peronismo. En respuesta al documento elaborado por las corporaciones reformistas en septiembre de 1972, la UIA suscribió una declaración elaborada en conjunto con sus aliados de ACIEL (SRA, Cámara Argentina de Comercio y la Bolsa de Comercio), que presentaron ante Lanusse. Allí rechazaron, en particular, la propuesta de elevar los salarios, argumentando que la espiral inflacionaria

---

<sup>14</sup>Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres, fundada en 1958 como contrapeso de la CGE, y comandada por la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial Argentina.

<sup>15</sup>*La Nación*, 24/3/1971.

<sup>16</sup>UIA. *Memoria y Balance 1970-1971*, p. 32.

<sup>17</sup>*La Nación*, 4/7/1970.



desatada provocaría el quiebre de muchas empresas, generando desocupación.<sup>18</sup>

A raíz de este documento haría eclosión una crisis interna que se venía procesando en el interior de la UIA. El centro de la disputa pasaba por un conjunto de capitales que venían pujando por acercar a la UIA a los postulados reformistas encarnados en la alianza CGE-CGT, que disputaba la dirección a los grandes capitales que bregaban por mantenerse dentro de la alianza reaccionaria que tenía en ACIEL su punta de lanza. Un primer momento de conflicto se disparó a raíz de un proyecto de promoción industrial promovido por el gobierno en 1971, cuyo eje era la atracción de inversiones extranjeras. El presidente de la UIA, Elvio Coelho, se mostró favorable a la iniciativa, provocando desacuerdos por derecha e izquierda.<sup>19</sup> Para ADIMRA<sup>20</sup> el proyecto encerraría “una peligrosa acentuación del intervencionismo estatal”.<sup>21</sup> Para los capitales más débiles, nucleados en la UIA de Santa Fe, la Asociación de Industriales de Córdoba y Cámara Argentina de la Industria Electrónica (CADIE), el problema radicaba en la promoción de capitales extranjeros, que cuestionaban. Ambas partes amenazaron con retirarse de la corporación si no se escuchaban sus reclamos. Así lo hizo CADIE, iniciando un proceso secesionista que amenazaba con extenderse al conjunto de los pequeños industriales que se acercaban a los postulados reformistas de la CGE y el peronismo.

En este contexto, la declaración suscripta por la UIA junto a otras corporaciones de ACIEL, que cuestionaba la propuesta de aumento salarial propiciada por la CGE en septiembre de 1972, terminó precipitando la crisis. Pocos días después de esta declaración, se desafilió la Unión Industrial de Santa Fe, asumiendo una postura similar a la de CGE: solicitó aumentos salariales urgentes, para recomponer el mercado interno y brindar posibilidades de expansión a las empresas. Solo este tipo de medidas permitirían, a su entender, transitar el camino hacia la institucionalización “en un clima de paz social”.<sup>22</sup> La precipitada escisión, y la amenaza de nuevos desgajamientos, llevaron a la dirección de la UIA a un replanteo de sus alianzas y a una revisión de sus posiciones. Tras el cisma, la UIA se inclinó hacia la propuesta de “aumentos razonables de salarios”, y se hizo pública su voluntad de abandonar ACIEL.<sup>23</sup> Su salida terminó formalizándose a comienzos de octubre,<sup>24</sup> y sus posiciones posteriores, demandando aumentos salariales y “reconsiderando” positivamente la intervención del Estado en la economía, dieron cuenta de la ruptura con la alianza “liberal” y el acercamiento al campo reformista.<sup>25</sup>

La salida de la UIA de ACIEL fue, sin dudas, la disidencia más importante que sufrió la alianza liberal, aunque no fue la única. A mediados de octubre de 1972, un sector de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dominada por los importadores, sufrió un desmembramiento. Esa ruptura dio lugar a la

<sup>18</sup> *La Nación*, 11/9/1972.

<sup>19</sup> *La Nación*, 3/7/1971.

<sup>20</sup> Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.

<sup>21</sup> *Cronista Comercial*, 5/7/1971.

<sup>22</sup> *Cronista Comercial*, 14/9/1972.

<sup>23</sup> *Cronista Comercial*, 15/9/1972.

<sup>24</sup> *La Opinión*, 11/10/1972; *Cronista Comercial*, 11/10/1972.

<sup>25</sup> *Cronista Comercial*, 31/12/1972.

conformación de la Unión Comercial Argentina, que nucleaba a capitales comerciales más pequeños que operaban en el mercado interno. Aunque no se alineó tras CGE, sus diferencias con ACIEL, por las medidas que tendían a congelar el mercado interno, la acercaban a los postulados reformistas, al igual que en el caso de la UIA.<sup>26</sup>

El recorrido de las corporaciones agropecuarias no fue ajeno a la fuerza que adquiriría la alianza reformista. Federación Agraria Argentina (FAA), Corporaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que habían constituido un frente contra la política agropecuaria de la Revolución Argentina, comenzaron a bifurcar sus trayectorias desde que la crisis de régimen puso sobre la mesa la apertura democrática y el retorno de Perón. El plan Krieger Vasena, que estableció retenciones a las exportaciones agropecuarias que compensaban los beneficios de la devaluación, generó la oportunidad política para una convergencia potencialmente inscripta en transformaciones estructurales. La histórica división entre las corporaciones agrarias, entre pequeños capitales arrendatarios y grandes terratenientes, era, hacia mediados de los '60, cosa del pasado. Una serie de transformaciones estructurales, entre ellas el acceso a la propiedad de la tierra de los pequeños capitales que sobrevivieron al proceso de concentración, habían atenuado las diferencias entre las explotaciones de mayor y menor tamaño.<sup>27</sup> A raíz de estos procesos, las explotaciones agropecuarias habían adquirido mayor homogeneidad, desapareciendo muchas de las contradicciones que antaño habían enfrentado internamente a las diferentes capas de la burguesía rural. La defensa de la renta diferencial de la tierra, un ingreso extraordinario que la burguesía agropecuaria se arrogaba para sí, fue lo que soldó la unidad corporativa del agro.

Luego de dos asambleas multitudinarias, en las que delegados de las cuatro corporaciones discutieron un programa común, a fines de 1970 terminó conformándose la Comisión de Enlace.<sup>28</sup> El acuerdo programático que los unía se centraba en combatir cualquier intento de apropiación de renta, por la vía de retenciones, impuestos, sobrevaluación cambiaria o controles de precios.<sup>29</sup> Era, en sí, un programa profundamente anti-popular y opuesto a cualquier forma de reformismo, que solo podría imponerse de la mano de una profunda ofensiva represiva. Sin embargo, la unidad que le daba vida no sobrevivió al proceso de crisis de régimen y al ascenso de la alianza reformista. Frente a la nueva coyuntura política, la burguesía agraria se dividió nuevamente.

Los caminos divergentes que tomaría la burguesía agropecuaria comenzaron a insinuarse en los balances contrapuestos que hicieron de las insurrecciones de

---

<sup>26</sup> *Cronista Comercial*, 11/10/1972; *La Nación*, 25/10/1972.

<sup>27</sup> Estos procesos han sido documentados por una profusa bibliografía, en la que se destaca Barsky, Osvaldo (Ed.) *El desarrollo agropecuario pampeano*. GEL, Buenos Aires, 1991.

<sup>28</sup> Hemos desarrollado este proceso en Sanz Cerbino, Gonzalo. "La historia negra de Federación Agraria Argentina. La intervención política de los 'chacareros' entre Onganía y Videla (1966-1976)". *Razón y Revolución*, nº 24, diciembre de 2012. Edición digital disponible en: <http://revistaryr.org.ar/index.php/RyR/issue/view/1>

<sup>29</sup> CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO. "El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones", Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

1969. Sin embargo, no fue hasta que se puso en marcha la transición democrática, en 1971, que la división se concretó. En particular para Federación Agraria, el Cordobazo habilitó un giro en las posiciones políticas sostenidas por la entidad. En un documento elevado a Onganía a principios de julio de 1969, FAA criticaba la orientación económica “monetarista”, que impuso una estabilización con altos costos sociales, a la que achacaba el estallido social. Demandaba un giro hacia el “estructuralismo” y la puesta en marcha del demorado “tiempo social”.<sup>30</sup> No es casualidad que haya sido FAA la primera en renegar de su apoyo a la política “liberal”. Era su forma de reaccionar ante el proceso de concentración y centralización de la economía, que afectaba particularmente a las capas más débiles de la burguesía agraria, nucleadas en su seno, expulsándolas de la producción. Muy distinto era el balance que hacía SRA de los estallidos insurreccionales. A diferencia de lo que caracterizaba FAA, la protesta sería “injustificada” y producto de “extremistas” y “provocadores”.<sup>31</sup> O sea, la violencia era externa a la sociedad, y no el resultado de un pueblo cansado de los costos que imponía la política económica.

Tras el alejamiento de Krieger Vasena, la Sociedad Rural y CRA, junto a sus socios de ACIEL, demandaron que se mantuviera el rumbo económico, y criticaron a quienes propiciaban el abandono de los lineamientos seguidos hasta ese momento en pos de un “estatismo” que terminaría derivando en el “colectivismo” que promovía el desorden y la protesta social.<sup>32</sup> Pero Federación Agraria, que había compartido la crítica “liberal” hasta 1969, comenzaba a tomar distancia de estos planteos. Más allá de la ambigüedad, tímidamente se iba arrojando a la alianza reformista que se reconstituía y cobraba fuerza. Hacia 1971 ese acercamiento se consumó. El proceso de restauración democrática estaba definitivamente lanzado, y el ascenso peronista parecía irrefrenable, no solo por las alianzas que había sabido construir en el trayecto, sino por la profundización de un proceso revolucionario que solo el retorno de Perón y el reflote de las ilusiones reformistas parecía capaz de contener. Frente a ello, FAA terminó abandonando a sus socios de la burguesía agraria para jugarse de lleno por la fuerza social encabezada por el peronismo y la CGE.

Con su nuevo presidente, Humberto Volando, FAA incorporaba nuevos tópicos que reforzaban un discurso nacionalista y reformista que encajaba perfectamente con los vientos que comenzaban a soplar. Así, la entidad manifestó su coincidencia con los dirigentes de CGE, CGT y diversos partidos políticos, señalando que “el país reclama un cambio de política económica”.<sup>33</sup> También propugnó, de la mano de los planteos que expresaba la alianza CGE-CGT, por aumentos salariales.<sup>34</sup> El cambio de etapa económica, motorizado por el ascenso de los precios internacionales de las mercancías agrarias, dio consistencia y viabilidad al giro reformista que se profundizaba en los planteos de la entidad.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> *La Tierra*, 2/7/1969.

<sup>31</sup> *Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1968-1969*, p. 63.

<sup>32</sup> *Cronista Comercial*, 4/7/1969; *La Nación*, 23/7/1970.

<sup>33</sup> *La Nación*, 20/3/1972.

<sup>34</sup> *La Tierra*, 4/5/1972.

<sup>35</sup> Iñigo Carrera, op. cit., pp. 51-85.

La impronta que adquiriría la salida democrática influyó también sobre algunos posicionamientos de CRA, que coqueteaba con el reformismo y tomaba distancia de ACIEL y SRA, sin alinearse abiertamente con sus antagonistas. Ello se evidenció en algunas de las medidas propuestas a mediados de diciembre de 1971, “ante el agudo proceso de deterioro económico”. Demandaba, por ejemplo, “reactivar la expansión económica”, “promover la descentralización industrial” y el “mantenimiento de los salarios reales como condición para fortalecer el consumo interno, permitiendo el crecimiento de la actividad de la empresa nacional a niveles óptimos”.<sup>36</sup> Las posiciones asumidas por la entidad contrastaban notoriamente con las de ACIEL y coincidían con la línea propuesta por Lanusse, a la que CRA se acercaba.

Lo que hasta 1971 fueron balances contrapuestos, se convirtió en un enfrentamiento abierto al año siguiente. En el marco de una disputa que cruzaba la sociedad por las características que asumiría la transición, en enero de 1972 la CGE lanzó una ofensiva convocando a medidas de fuerza que escondían, detrás de los reclamos corporativos, el intento de imponer una restauración democrática sin restricciones. Tras realizar un balance crítico de la coyuntura política y económica, FAA respaldó abiertamente las medidas convocadas por CGE, coincidiendo en la necesidad de fortalecer a las pequeñas industrias y “elevar el poder adquisitivo de los sectores populares”.<sup>37</sup> Frente a las objeciones provenientes del arco liberal, FAA defendió a la CGE de sus detractores, señalando que quienes criticaban las medidas de fuerza “prefieren resguardar sus privilegios de hoy a salvaguardar en su integridad el cuerpo social”.<sup>38</sup> Acompañando la ofensiva de la CGE, en marzo de 1972 Federación Agraria se lanzó a convocar medidas de fuerza, realizando actos y asambleas en distintos puntos del país.<sup>39</sup>

Otro punto que dividía aguas entre reaccionarios y reformistas era el de la propiedad privada de la tierra. El programa elaborado por la CGT y la CGE, en sintonía con los planteos del peronismo, contemplaba realizar una “reforma agraria” para poner en producción las “tierras ociosas” o “deficientemente explotadas”. Como expresó el presidente de Federación Agraria, la entidad apoyaba la reforma, no tanto por los beneficios que pudieran recibir sus bases, que habían accedido ya a la propiedad de la tierra en los años previos, sino porque apuntaba a dar contención a la conflictividad social: “soy un pequeño propietario [pero] prefiero esta solución a que mañana me sorprenda una invasión de campos por parte de trabajadores sin tierras.”<sup>40</sup> Los dirigentes de CRA y SRA salieron a cuestionar el pronunciamiento público de FAA a favor de la reforma agraria, acusándola de incentivar un debate que dividiría el frente agropecuario. Se posicionaron por una defensa irrestricta de la propiedad privada de la tierra y acusaron a los partidos políticos que apoyaban el proyecto de “generar incertidumbre” y perturbar la actividad privada.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> *La Nación*, 15/12/1971.

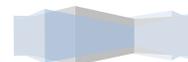
<sup>37</sup> *La Tierra*, 27/1/1972.

<sup>38</sup> *La Tierra*, 3/2/1972.

<sup>39</sup> *La Nación*, 1/4/1972 y 9/4/1972; *La Tierra*, 6/4/1972.

<sup>40</sup> *La Tierra*, 20/7/1972.

<sup>41</sup> *Cronista Comercial*, 29/7/1972.



El tema había adquirido tal relevancia que hasta se coló en la interna de la Sociedad Rural, con la presentación de una lista opositora a las elecciones en las que se renovaría la comisión directiva y la presidencia, un hecho inédito en la vida institucional de la entidad. Más aún lo eran los términos en los que se planteó la disputa, en la que la lista opositora retomaba propuestas esbozadas por Federación Agraria, como la “función social de la tierra” o la necesidad de una “economía concertada”, elementos del programa reformista que agitaba a su vez el peronismo. En solicitudes y actos públicos la lista opositora había planteado la necesidad de que los productores asumieran “mayor responsabilidad social”, para dar respuesta a las necesidades de las masas y satisfacer los reclamos de “justicia social”.<sup>42</sup> Las entidades gremiales empresarias y obreras debían comportarse “no como grupos de poder para lograr beneficios sectoriales sino como armonizadoras del esfuerzo al servicio del interés general”. De allí se derivaba un planteo que sintonizaba con la “política concertada” obrero-patronal planteada desde el peronismo: “la concertación entre todos los sectores y regiones de la comunidad nacional con el Estado, para la elaboración de planes de política económica y social aceptados y luego apoyados por todos.”<sup>43</sup> La lista opositora cuestionaba también la defensa incondicional de la propiedad de la tierra, enfatizando la necesidad de anteponer su “función social”.<sup>44</sup>

Aunque en los comicios se impuso la lista oficial, eso no restaba importancia a la formalización de una oposición “reformista” a la dirección de SRA, que se alzó con tres vocalías suplentes en la Comisión Directiva.<sup>45</sup> Las elecciones tuvieron una alta participación: votaron 5.314 socios de los 9.700 habilitados, un número considerablemente mayor a los 3.000 ó 4.000 de una elección “normal”. La lista oficial obtuvo 3.147 escaños, contra 2.126 de la oposición.<sup>46</sup> Es decir que un 40% de los votantes respaldaron un cambio de dirección que hubiera ubicado a la Sociedad Rural en el campo del reformismo. Es imposible no ligar este hecho absolutamente excepcional a una coyuntura política en la que, la profundización del proceso revolucionario colocaba al peronismo como única alternativa viable para contener la conflictividad social, que ponía en peligro la continuidad de las relaciones de producción capitalistas. Los “disidentes” de la Sociedad Rural se sumaban así a otros sectores de la burguesía, como la UIA o FAA que, renegando de posiciones anteriores, se sumaban a la alianza reformista encabezada por la CGE que prometía conjurar la crisis política y dar cause institucional a la radicalización de las masas.

### **Cámpora al gobierno, Gelbard al poder**

Las posiciones asumidas por las corporaciones empresarias ante la apertura democrática se confirmaron con el triunfo del peronismo en las elecciones presidenciales. Quienes venían impulsando el retorno al reformismo, en particular CGE y FAA, aportaron al nuevo gobierno proyectos y funcionarios. Los agrupamientos que expresaron las posiciones más reaccionarias y anti-

<sup>42</sup>Palomino, *Tradición y poder...*, op. cit., p. 67.

<sup>43</sup>Citado en ídem, p. 67.

<sup>44</sup>*La Nación*, 1/9/1972.

<sup>45</sup>Palomino, *Tradición y poder...*, op. cit., p. 68.

<sup>46</sup>*Cronista Comercial*, 28 y 29/9/1972.

reformistas, como ACIEL o la Comisión de Enlace, se disolvieron. Las corporaciones que otrora habían estado a la cabeza del combate contra el “populismo”, como la UIA, CRA o SRA, vieron crecer líneas internas que proclamaron abiertamente la necesidad de acercarse a los postulados reformistas. En la UIA y CRA, esas líneas internas lograron imponerse antes de la victoria abrumadora del peronismo en las elecciones presidenciales. En el caso de SRA, el acercamiento al gobierno se produjo con posterioridad al triunfo electoral. Pero en todos los casos, las posiciones que las corporaciones asumieron ante el nuevo gobierno fueron motivo de arduas disputas internas, que marcaron una evolución zigzagueante de la relación de las distintas fracciones de la clase dominante con el peronismo que retornaba al poder. En este acápite intentaremos dar cuenta entonces de esta conflictiva relación.

El derrotero la CGE es conocido. Su máximo dirigente, José Ber Gelbard, asumió como ministro de Economía el 25 de mayo de 1973. Se mantuvo en el cargo hasta octubre de 1974, aun en un clima de feroces internas que cruzaban el gobierno. Asumió con Cámpora como presidente y se mantuvo en el cargo con Lastiri, Perón e Isabel. Sin duda, podemos decir que la fracción de la burguesía que representaba era el principal sostén, en el mundo empresario, del tercer gobierno peronista. Su programa económico, de cuño abiertamente reformista, fue elaborado conjuntamente con la CGT en los meses previos al triunfo electoral. Ese plan económico apuntaba a recrear el mercado interno mediante una recomposición salarial, proteger a la industria más débil y contener la inflación. Este programa, inviable durante el período previo en el que los bajos niveles de renta obligaron a realizar ajustes a nivel salarial, de gastos estatales y transferencias a la industria, era ahora posible merced a una coyuntura internacional claramente favorable. El aumento de los precios internacionales de granos y carnes hizo que el programa peronista tuviera, por lo menos en el corto plazo, posibilidades de realización. Gelbard, entonces, colocaba al agro, otra vez, en un lugar central, en tanto era el sector que financiaría el plan. A través de la estatización del comercio de granos y carnes, las retenciones y, sobre todo, de una sobrevaluación cambiaria que alcanzó, entre 1974 y 1975, un 45%, los sectores no terratenientes se apropiaron del grueso de la renta diferencial.<sup>47</sup> Los subsidios y el crédito promocional, y la posibilidad de comprar insumos y maquinaria con un dólar barato, fueron las vías principales en que la renta captada por el Estado fue a parar al ineficiente entramado industrial. Pero la iniciativa más importante encarada por Gelbard fue el acuerdo entre una fracción del empresariado y las cúpulas sindicales, destinado a contener la inflación. El “Pacto Social” fue suscripto por la CGT y la CGE, aprobado por el conjunto de la burguesía industrial, y aceptado a regañadientes por casi todas las capas de la burguesía agraria. A partir de su firma, los empresarios se comprometían a no aumentar los precios o realizar sustanciales rebajas en algunos renglones de la producción, y los dirigentes sindicales a no encarar luchas por aumentos salariales. El acuerdo tenía implicancias que trascendían los objetivos económicos: el cerrojo que se imponía sobre los conflictos salariales apuntaba no solo a contener la inflación, sino a aquietar las aguas de la conflictividad laboral.

---

<sup>47</sup> Iñigo Carrera, op. cit., pp. 41-45.

El programa económico era pura ganancia para la burguesía industrial: los recursos abundaban y el gobierno estaba dispuesto utilizarlos en su beneficio. Por esa razón, la UIA, que ya se había acercado a los planteos reformistas presionada internamente por sus sectores más débiles, fue, junto a la CGE, el principal apoyo que encontró Gelbard en la clase dominante. Tras el triunfo electoral, Elvio Cohelo, presidente de la UIA, expresó su respaldo al nuevo gobierno:

“Estoy absolutamente seguro, doctor Cámpora, de que en un clima de estabilidad política, de orden y con una conducción económica apropiada, el empresariado argentino demostrará ampliamente al país y al gobierno constitucional que usted presidirá, sus condiciones para contribuir al aumento de la riqueza de la Nación y de su pueblo.”<sup>48</sup>

Posteriormente, Cohelo resaltó las coincidencias que lo llevaban a apoyar al peronismo: “mayor desarrollo industrial, la mejor protección y su adecuada distribución espacial, son objetivos que comparto [con el gobierno] por considerarlo como primera y auténtica necesidad nacional”.<sup>49</sup> Aunque no participó de la elaboración del programa económico, la UIA se pronunció a favor del Pacto Social, condenando la “desastrosa política salarial que comenzó durante 1970”:

“Esa política, si es que merece llamarse tal a la ausencia de ella, es la causante principal del pavoroso déficit fiscal, de las perniciosas expectativas inflacionarias que tanta responsabilidad tienen en nuestra lamentable tasa de aumento de las crisis en las empresas que provocan continuamente conflictos sociales y del incremento pernicioso en la desocupación. [...] La justicia y el equilibrio presiden esta nueva concepción salarial [el Pacto Social] y por lo mismo puede constituirse en un instrumento fundamental que haga posible un restablecimiento de la solidez y el dinamismo de nuestra economía”.<sup>50</sup>

No sólo eso. En una muestra concreta de respaldo, la UIA convocó a una reunión a las principales empresas de cada rama de la industria para acordar una disminución de los precios con el fin de contribuir al cumplimiento de la política de estabilización emprendida por el nuevo gobierno. En efecto, 180 empresas asociadas a la UIA dispusieron rebajas de entre un 7 y un 14% en sus precios para prestar ayuda al plan.<sup>51</sup> La entidad, a su vez, se sumó a las Comisiones Sectoriales de Precios, que el gobierno creó para monitorear la evolución del Pacto Social. También defendió abiertamente al peronismo contra sus detractores, a izquierda y derecha. En el discurso de cierre del acto del Día de la Industria de 1973, Coelho expresó claras definiciones políticas:

<sup>48</sup> *La Prensa*, 13/4/73.

<sup>49</sup> *La Prensa*, 26/5/73.

<sup>50</sup> *La Nación*, 10/6/73.

<sup>51</sup> *La Nación*, 14/6/73.

“Algunos resisten el cambio procurando aferrarse desesperadamente a los restos de un tiempo que no volverá. La ultraderecha que resiste el cambio sueña con un pasado al que en el fondo idealiza cayendo en una utopía de retrospección. La ultraizquierda comete una utopía de anticipación, al suponer dogmáticamente que todo futuro es mejor que el presente y que toda tradición debe quemarse ante el altar de la revolución [...] El cambio nos impone la noble misión de luchar contra la pobreza, por la creación de nuevas fuentes de trabajo, por el ascenso social, por la creciente creación de bienes que satisfagan las necesidades de la población, luchar por la grandeza argentina [...]”<sup>52</sup>

El apoyo al gobierno llevó a la UIA a plantearse, poco tiempo después, la unificación con la CGE. Esa voluntad quedó plasmada en un acta firmada por las autoridades de ambas corporaciones, en el verano de 1974, donde manifestaron “su coincidencia con los objetivos generales enunciados en materia económica por el superior gobierno y con los propósitos que han originado el [Pacto Social]”.<sup>53</sup> El 29 de abril de ese año quedó ratificada la vocación de unificación empresaria al elegirse como miembros del consejo superior de la CGE a tres dirigentes de la UIA. El 3 de julio de 1974, la UIA y la CGI (Confederación General Industrial, integrada a la CGE) quedaron fusionadas en la Confederación Industrial Argentina (CINA), nueva “pata industrial” de la CGE. En su discurso, el presidente de la nueva entidad, Carlos Coquegniot, justificó la unión como un acto que tenía presentes “los superiores intereses de la Nación, que necesita alcanzar su plena independencia, de integración, de auténtica representatividad y de solidaridad social”.<sup>54</sup> En el primer plenario luego de la unificación se acordó un documento en defensa del gobierno peronista, que planteaba:

“El plenario

“1) Apoya incondicionalmente el proceso de institucionalización que vive el país y que continuará bregando por el mantenimiento de la unidad nacional.

“2) Reconoce en la actual política económica [...] el verdadero camino para obtener la reconstrucción y la liberación nacional.

“3) El empresariado tiene conciencia de la difícil tarea que han tenido que afrontar las autoridades y del largo camino que aún resta por recorrer. El ataque de los enemigos es por los aciertos [...] Ello debe llevarnos a defender celosamente lo realizado, para [...] seguir avanzando en forma resuelta hacia los grandes objetivos fijados. Por su parte, el Gobierno ha dado pruebas suficientes de su disposición al diálogo constructivo que posibilita la rectificación cuando corresponde.”<sup>55</sup>

Quedaba de manifiesto así el contenido político de la unificación: la defensa de una política económica que claramente los favorecía. Por esta razón, el respaldo de la CINA al gobierno se mantuvo incluso cuando comenzaron a

---

<sup>52</sup> *La Nación*, 4/9/73.

<sup>53</sup> *La Nación*, 23/2/74.

<sup>54</sup> *La Nación*, 3/8/74.

<sup>55</sup> *La Nación*, 20/8/74.



aflorar las turbulencias. Tras la renuncia de Gelbard, sus sucesores siguieron encontrando un claro apoyo en las corporaciones industriales. Será recién en la segunda mitad de 1975, cuando la caída de los precios internacionales de las materias primas y la necesidad de imponer un ajuste intensifiquen la conflictividad social, que algunas fracciones industriales comiencen a retacear su respaldo al gobierno. Como muchos otros sectores del empresariado, terminaron sumándose a la alianza que impulsó el golpe de estado en 1976.

### De la concertación a la reacción

En materia de política agropecuaria, el peronismo no ocultó su voluntad intervenir captando una porción sustantiva de la renta diferencial en alza para destinarla a los sectores urbanos. Buena parte del paquete de leyes remitido a las cámaras apuntaba en ese sentido. Era el caso de las leyes sobre comercialización, que buscaban nacionalizar y centralizar en el Estado el comercio interior y externo de granos y carnes. A través de las Juntas de granos y carnes, que sufrieron sustanciales reformas, el Estado establecía el precio único de los productos, captando la diferencia entre los valores pagados internamente y los internacionales. A su vez, esto se conjugó con los mecanismos tradicionales para captar la renta diferencial: retenciones y demás impuestos, junto al tipo de cambio. La otra pata de la política agraria peronista fueron las iniciativas que apuntaban a reformar la estructura de tenencia de la tierra, que se conjugaban con mecanismos para segmentar la carga impositiva a favor de los productores de menor tamaño. Con este objetivo se sancionaron rápidamente algunas medidas, como la suspensión de los desalojos de arrendatarios, la ley de colonización y la de Fomento Agrario, que habilitaba una línea de créditos para que los arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. Otra iniciativa en ese sentido fue la sanción del impuesto a la renta potencial de la tierra, instrumento que castigaba impositivamente las tierras ociosas o mal explotadas. Aunque nunca llegó a aplicarse, se suponía que su efecto sería la disminución de la carga sobre las pequeñas explotaciones (a las que se asumía como más eficientes), mientras que desincentivaría la tenencia ociosa de grandes predios. Una iniciativa con fines similares fue el anteproyecto de Ley Agraria publicitado en 1974, que se discutió hasta el hartazgo aunque nunca fue remitido al parlamento. Este proyecto establecía mecanismos para que el Estado expropiara o diera en arriendo forzoso las tierras explotadas por debajo de su capacidad.<sup>56</sup> Sin embargo, ninguna de estas iniciativas tuvo efectos importantes. En el caso de las leyes sobre arrendamientos, porque como señalaba la prensa de la época, ésta era ya “una figura poco común”. Por esa razón, estos proyectos serían una “concesión a la FAA –que forma parte de la CGE- sin ninguna trascendencia práctica.”<sup>57</sup> En el caso del impuesto a la renta potencial, porque nunca se avanzó decididamente en su implementación completa, quedando a la postre como un impuesto más a la tierra. Y en el caso del anteproyecto de Ley Agraria, porque sectores internos del gobierno resistieron su sanción, al punto de terminar cajoneado. En

<sup>56</sup>Lattuada, Mario. *La política agraria peronista (1943-1983)*. CEAL, Buenos Aires, vol. 2, 1986; Lázaro, Silvia. “La política agraria del peronismo durante la década de 1970. ¿Planificación concertada” para una “auténtica revolución en paz”? XIV Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia, Mendoza, octubre de 2013.

<sup>57</sup>*Clarín*, 21/7/1973.

términos concretos, la política agraria peronista se redujo a una serie de mecanismos que apuntaban a captar la renta agraria que financiaría el programa económico, barnizada con tonos reformistas (la nacionalización del comercio exterior) y acompañada con proyectos que remitían a la retórica de la “reforma agraria”, aunque nunca pasaron de la declaración de intenciones.

La recepción de esta política no fue uniforme en las corporaciones agrarias. La captura de mayores porciones de renta diferencial fue aceptada a regañadientes. Muchos factores primaron en la resignación con la que se aceptó, en un primer momento, lo que era un hecho consumado. En primer lugar, los precios eran altos, con lo que no era mayor problema resignar parte de la ganancia extraordinaria de allí derivada. En segundo lugar, por la coyuntura política, en donde pesaba tanto el miedo al desborde por izquierda de las masas como el abrumador triunfo peronista que daba fuerte respaldo popular a la ofensiva reformista. Por otro lado, algunas fracciones, como la representada por FAA, esperaban que los mecanismos de segmentación de la carga impositiva bajaran el precio de su contribución al programa económico. Y a su vez, esperaban compensar las pérdidas beneficiándose de las iniciativas reformistas en materia de tenencia de la tierra. El resto de las corporaciones, que combatía con igual recelo tanto la exacción de renta como la reforma de la estructura, se acercaron al peronismo con la esperanza de bloquear desde dentro las aristas más perjudiciales de la política agropecuaria. En cualquier caso, lo que observamos es un alineamiento (no exento de tensiones) de la mayoría de las corporaciones con el gobierno en los primeros meses. Con la apertura de una nueva crisis económica, estas mismas entidades comenzarían a pasarse abiertamente a la oposición entre 1974 y 1975. Ya sobre el final del gobierno de Isabel, todas las corporaciones agrarias iniciarían un proceso de movilización y paros que contribuyeron decididamente a desestabilizarlo, generando las condiciones para el golpe de estado.

Aunque sus corporaciones no participaron oficialmente de la ronda de negociaciones, el Pacto Social también incluía al sector rural: además del paquete de leyes mencionado, el gobierno estableció precios máximos para los productos agropecuarios de mayor incidencia en la canasta familiar, incluyendo una rebaja para las carnes que alcanzaba al 20% de los valores existentes. El gobierno informó a los dirigentes del sector su “aporte” en una reunión, tras la cual la Comisión de Enlace emitió uno de sus últimos comunicados respaldando el “acuerdo”.<sup>58</sup> Una vez suscripto el Pacto Social, la CGE intentó sumar el apoyo de las corporaciones empresarias que no fueron parte de su elaboración. A tal fin, convocó a una asamblea en el Teatro San Martín de la Capital Federal, que se realizó el 14 de junio. Con resquemores y alguna queja (en particular, que no habían sido consultados para la elaboración del plan y que el “aporte” del agro era mayor al de otros sectores), los titulares de CONINAGRO, CRA y SRA respaldaron con su presencia el Pacto Social.<sup>59</sup>

Distinto era el caso de FAA, que expresaba públicamente una gran satisfacción con el triunfo electoral del peronismo y esperaba que la nueva gestión diera cabida a sus planteos. En una alocución frente a cooperativistas, Humberto

---

<sup>58</sup> *La Nación*, 2/6/1973.

<sup>59</sup> *La Nación*, 15/6/1973.

Volando, presidente de FAA, señaló los tres ejes que a su entender debía encarar el nuevo gobierno en materia de política agropecuaria: 1) Expansión del cooperativismo, en tanto instrumento idóneo para la liberación nacional en la comercialización interna y externa de la producción; 2) Implementación de la reforma agraria prometida por el peronismo en su plataforma electoral, que garantizara el acceso a la tierra de todos los que quisieran trabajarla y la puesta en producción de toda superficie apta para ello; 3) Un régimen impositivo orientado al incremento de la producción y a la mayor justicia distributiva.<sup>60</sup> Aunque a un nivel general la política agraria peronista coincidía con estos planteos, en la “letra chica” se expresarían diferencias sustanciales que generarían tensiones en la relación. Los primeros chispazos surgieron al hacerse pública la “contribución” del agro al sostenimiento del Pacto Social. El motivo de discordia eran los nuevos precios de los productos agropecuarios, que FAA aceptó en tanto eran necesarios para contener el proceso inflacionario heredado de la gestión Lanusse, aunque no dejaron de marcar la notoria “injusticia” para con el campo. Por ello, establecieron dos condiciones para aceptar los precios impuestos: 1) Que los sacrificios hechos debían ser replicados por otros sectores, congelando, por ejemplo, los precios de los insumos; 2) Dado que el aporte se destinaba a contener una situación de crisis, debía tener un carácter excepcional. En el mediano plazo, la presión fiscal sobre el agro debía disminuir con la fijación de “precios remunerativos” para la próxima cosecha y con la eliminación de algunos de los impuestos establecidos por el gobierno anterior.<sup>61</sup>

Para la entidad, era una garantía que el gobierno hubiera convocado para la elaboración de la política agropecuaria a hombres provenientes del núcleo federativo. Aunque Humberto Volando había declinado el ofrecimiento para sumarse al equipo económico,<sup>62</sup> uno de los cuadros de FAA, Avelino Strólogo, fue promovido a la función pública, ocupando el puesto de subsecretario a cargo del área de Agricultura y Ganadería. Strólogo venía de desempeñarse como gerente general de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA, ligada a FAA) desde 1960 y había fungido como asesor de FAA. Por esa razón la entidad saludó cálidamente la conformación del gabinete de Cámpora.<sup>63</sup> Sin embargo, el aporte más destacado de FAA no fueron los funcionarios, sino los proyectos de ley que la entidad elaboró y acercó al gobierno, muchos de los cuales fueron finalmente sancionados. La Ley de Suspensión de Desalojos y la Ley de Fomento Agrario, proyectos remitidos al Congreso y rápidamente aprobados, fueron elaborados por la entidad. Otros proyectos, como la Ley de Tierras Improductivas, que fijaba el criterio de la “función social” de la tierra y el mecanismo de la entrega en arrendamiento de aquellas que no alcanzaran el 50% de su productividad potencial, no fueron aprobadas pero sus principios fueron retomados por la Ley Agraria elaborada por la Secretaría de Agricultura en 1974.<sup>64</sup>

El respaldo prestado a un gobierno cuyas primeras medidas fueron congelar y rebajar los precios agropecuarios, a cambio de una serie de reformas que de

<sup>60</sup> *La Tierra*, 26/4/1973.

<sup>61</sup> *La Tierra*, 28/6/1973.

<sup>62</sup> *Cronista Comercial*, 23/5/1973.

<sup>63</sup> *La Tierra*, 31/5/1973.

<sup>64</sup> *La Tierra*, 28/6/1973.

llegar a concretarse, en poco beneficiarían a la masa de afiliados a la Federación Agraria,<sup>65</sup> despertó los primeros cuestionamientos internos a la dirección de la entidad. De ello daba cuenta Humberto Volando en una carta abierta a los afiliados publicada en *La Tierra*. Allí aceptaba que existía “preocupación” en los pequeños productores por el “aparente silencio” de FAA ante “algunas medidas económicas tendientes a reducir el precio de los productos agropecuarios; el continuado aumento de los insumos [y] los rumores con respecto a las medidas impositivas”.<sup>66</sup> Siendo conciente del descontento que el apoyo a la política oficial despertaba, Volando pedía paciencia a los afiliados y exigía confianza en sus dirigentes. A pesar de los resquemores, FAA mantuvo su apoyo al gobierno, aunque criticando cada medida puntual que afectaba sus intereses. El gobierno concedió casi todos los reclamos de Federación Agraria, pero no podía renunciar al más importante: precios “retributivos” para la producción rural. La disputa por los niveles de exacción de renta (que se manifestaba en los precios) era el corazón del conflicto entre las corporaciones agrarias y el gobierno. Y como de ello dependía el financiamiento de todo el programa económico, el gobierno no podía aligerar la carga. El precio de los granos fue el detonante del primer cruce serio con el gobierno, que terminó derivando en la renuncia del subsecretario de Agricultura, Avelino Strólogo. Así reseñaba el episodio Horacio Giberti, hombre fuerte del área, que asumiría el puesto que quedaba vacante tras la renuncia:

“A Strólogo [...] no le parecieron razonables los precios que fijábamos nosotros para los granos; que no eran precios máximos, sino únicos porque el Estado compraba todo. Ocurrió que en una reunión de gabinete, D’Adamo [subsecretario de Hacienda y Finanzas] informó cuáles serían los precios, y Strólogo consideró que eran bajos e intentó cambiarlos. Gelbard estaba presente, y le dijo: ‘No, los precios tienen que ser esos porque esa es nuestra política.’ Entonces Strólogo –así muy desafiante, como si fuera una presión- le contestó: ‘Bueno, entonces yo renuncio’.”<sup>67</sup>

La versión del subsecretario saliente no difería en lo sustantivo: señaló que no tenía el grado de participación que correspondía en las decisiones sobre la política para el sector.<sup>68</sup> Una crónica periodística agrega que sus “proyectos fueron ignorados por la conducción económica, y no se [lo] consultó, sino que se [lo] notificó, sobre decisiones que habría de adoptar el gobierno en materia agropecuaria”.<sup>69</sup> A su vez, estando Strólogo en funciones, se lo habría relegado frente a la figura de Giberti. El hecho, sumado a la decisión de mantener

---

<sup>65</sup> Como su propia dirigencia reconoció en más de una oportunidad, el acceso a la propiedad de la tierra, a la que apuntaban la mayoría de las reformas, no era un problema para el grueso de los afiliados a FAA, mayoritariamente propietarios. Si podía beneficiar, sin embargo, a los hijos de los pequeños productores, por la posibilidad de adquirir tierra para independizarse.

<sup>66</sup> *La Tierra*, 28/6/1973.

<sup>67</sup> Ramírez, Horacio. *Horacio Giberti: Memorias de un imprescindible*. Ediciones CCC, UNQUI, Buenos Aires, 2011, p. 362.

<sup>68</sup> *Cronista Comercial*, 20/7/1973.

<sup>69</sup> *Cronista Comercial*, 1/8/1973.

congelados los precios de los granos, habría “dado lugar a situaciones tensas entre el ministro de Hacienda y Finanzas [Gelbard] y los directivos de la Federación Agraria”, avivando resquemores ya existentes. Por esta razón, algunos sectores dentro de FAA habrían planteado “firmemente” la posibilidad de separarse de la CGE.

Pocos días después FAA pasaba en limpio sus diferencias con el gobierno, en un documento que planteaba que el Pacto Social era un acuerdo destinado a contener una situación de emergencia, pero que era necesario comenzar a instrumentar las políticas para “generar las riquezas” que permitieran profundizar el desarrollo. Detrás de ese eufemismo se escondía la demanda de acrecentar la “producción y la productividad” agropecuaria, para lo cual el campo “demanda estímulos y no frenos”.<sup>70</sup> Además de encarar la reforma de la estructura que permitiera aumentar la productividad, exigían derogar impuestos, que se concrete la prometida rebaja en el costo de los insumos y la participación de los “productores” en los organismos que establecían los precios, que debían ser “remunerativos”. En suma, una vez más, FAA exigía al gobierno que disminuyera el peso de la exacción fiscal sobre la burguesía agraria y la apropiación de una menor porción de renta diferencial.

El alejamiento de FAA del gobierno era acicateado por una línea interna comandada Antonio Di Rocco, ex presidente de la entidad y miembro de su Consejo Directivo, que criticaba en duros términos la política oficial. El establecimiento de bajos precios para el trigo fue calificado, en una nota firmada por el dirigente, como una medida de “demagogia barata”, producto de la “tónica anticampo” que predominaba en el equipo económico. Con una dureza inusual, señalaba:

“¿Y todo para qué? ¡Aparecer magnánimos y con gran sensibilidad popular con lo ajeno! ¡Disponer arbitrariamente de la diferencia de valor de un producto, cuya demanda mundial habría permitido ampliar considerablemente el área cultivada! ¡Si que vamos lindo...! [El] sentido común es el que me obliga a enjuiciar a esta mala conducción económica. La enjuicio por inoperante, por atentatoria de los superiores intereses de la Nación y por ende a la propia doctrina del Justicialismo [...]”<sup>71</sup>

La crítica de FAA era compartida por otras corporaciones (como SRA o CRA) que, sin tanto fervor, habían expresado también su respaldo al gobierno. Estas sumaban, a la crítica por los niveles de exacción de renta, la “preocupación” por el “creciente intervencionismo estatal” o por medidas, como el impuesto a la renta potencial, que ponían en cuestión la propiedad privada de la tierra. El peronismo enfrentaba así, a pocos meses de haber asumido, la apertura de un frente opositor que ponía en peligro la estabilidad política y económica. Por esa razón, luego de haber tensado la soga, Gelbard y Giberti se apresuraron a buscar un acercamiento con el sector, que terminó cristalizando en la firma del “Acta de Compromiso entre el Estado y los Productores para una Política Agropecuaria y Forestal”.

<sup>70</sup> *La Tierra*, 16/8/1973.

<sup>71</sup> *La Tierra*, 4/9/1973.

A comienzos de septiembre, el gobierno convocó a una reunión a representantes de todas las entidades agropecuarias, buscando mejorar la relación. La reunión fue motorizada por los contactos informales de algunos funcionarios públicos con dirigentes agropecuarios que, según *La Nación*, “coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos que permitieran superar el distanciamiento a cuyo amparo parecían prosperar las posiciones más radicalizadas.”<sup>72</sup> El gobierno se mostraba dispuesto a embarcarse en un diálogo en el que podrían revisarse ciertas iniciativas en marcha, pero “en un marco más general que admita la necesidad de introducir serias reformas.” Desde el gremialismo agropecuario, uno de los sectores que habría propiciado el restablecimiento del diálogo era la línea interna de la Sociedad Rural (con presencia en la dirección de CRA) que había disputado la conducción en las elecciones de 1972. Un comunicado emitido por este nucleamiento señalaba que “no hay derechos exigibles sin obligaciones cumplidas”, en clara referencia a que los reclamos del “campo” solo serían válidos sobre la base de una contribución al proceso en marcha. Pero ese aporte demandaba del gobierno, a su vez, clarificar las “reglas del juego” y garantizar la “seguridad jurídica”.<sup>73</sup> El comunicado cerraba poniendo límites a las exigencias de ambos extremos: “nadie que pretenda una Argentina plena, está en condiciones de afirmar que el país puede vivir sin su campo, ni que éste significa algo si no se encuentra insertado en el quehacer nacional.” Sobre el comunicado observaba *La Nación*: “la reunión que habrá de efectuarse esta tarde parece animada por esos principios”.<sup>74</sup>

En las reuniones celebradas entre el segundo de Gelbard, D’Adamo, y dirigentes de SRA, CRA, CONINAGRO, FAA, CARBAP<sup>75</sup> y 24 instituciones más asociadas a la CGE, el gobierno propuso la firma de un documento que sentara las bases de una futura política concertada. Luego de una serie de intercambios, en los que se hicieron objeciones al documento base, el grueso de las entidades (todas a excepción de CARBAP) acordaron suscribir el Acta. En términos generales, los productores asumían el compromiso de encarar una “explotación racional” de sus propiedades, y se fijaban metas de producción hasta 1980. A su vez, aceptaban la aplicación del impuesto a la renta potencial a partir de 1975. El gobierno, por su parte, garantizaba una política estable y “reglas de juego claras” por los próximos doce años: la colocación de la producción “a precios justos y compensatorios, fijados con participación de los productores”; que la legislación impositiva no sería modificada en los próximos cuatro años; y que sería respetado el derecho de propiedad privada de la tierra (en función de la productividad y los fines sociales). También aseguraba el apoyo a la expansión agropecuaria y la incorporación de tecnología, crédito promocional y respaldo a las cooperativas. Por último, el Acta disponía la creación de una Comisión de Política Concertada, en la que representantes de las corporaciones y funcionarios públicos discutirían las medidas para el sector.<sup>76</sup> Junto con el anuncio del acuerdo, Gelbard dio a conocer también los

---

<sup>72</sup> *La Nación*, 5/3/1973.

<sup>73</sup> *Idem*.

<sup>74</sup> *Idem*.

<sup>75</sup> Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, corporación de segundo grado integrada a CRA (y la más poderosa en su seno).

<sup>76</sup> *La Nación*, 6, 7 y 21/9/1973.

nuevos precios para la cosecha gruesa, con sustanciales mejoras respecto a los vigentes, dejando en claro también la posibilidad de realizar reajustes en el futuro ante aumentos de los costos. Evidentemente, el gobierno tenía voluntad de conciliar.<sup>77</sup>

FAA saludó el cambio de actitud. En un acto en Las Varillas, Córdoba, Humberto Volando destacó que el gobierno habría escuchado finalmente el reclamo de los productores. Prueba de ello era el establecimiento de un mejor precio para el trigo y la firma del Acta de Compromiso, que constituiría “el punto de partida para realizar una política agropecuaria no cristalizada hasta este momento.”<sup>78</sup> También manifestó entusiasmo la dirigencia de CRA. En una entrevista, su vicepresidente 1º, Raúl Vivas, consideró positivamente las resoluciones más controvertidas del Acta, como el impuesto a la renta potencial y los criterios para la fijación de precios. Consideró “alcanzables” las metas de producción acordadas, si se respetaban los criterios fijados, en particular, los precios remunerativos y la disminución de la carga fiscal. Relativizó, a su vez, la decisión de una de sus afiliadas, CARBAP, de rechazar la firma del acuerdo. Dejaba entrever, esperanzado, que la decisión pudiera revertirse una vez consultados los cuerpos directivos de la entidad.<sup>79</sup> La dirigencia de SRA justificó la decisión de firmar el Acta ya que, “como entidad representativa, tiene la obligación de mantener un diálogo lo más fluido posible con el gobierno nacional”.<sup>80</sup> Destacaban positivamente que el compromiso no solo afectaba a los productores, sino también al gobierno, que debía garantizar las condiciones generales para estimular la producción y alcanzar las metas fijadas, con buenos precios y estabilidad monetaria.

De esta manera, tras una primera crisis, el gobierno volvía a atraer al conjunto de las corporaciones agropecuarias a su planteo de una política concertada. Sin embargo, un sector minoritario se mantuvo alejado de estos “cantos de sirena”, iniciando una resistencia contra el reformismo a la que, poco a poco, se irían plegando los demás. En una jugada audaz, apenas una semana después de que los dirigentes más encumbrados del agro respaldaran el Pacto Social en el acto del Teatro San Martín, una ignota “Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa” se lanzó a cuestionar los “precios políticos” establecidos por el gobierno, que llevarían al sector a una crisis.<sup>81</sup> ¿De dónde había salido esta comisión que cuestionaba el Pacto Social a contramano de todo el mundo? La Comisión de Enlace de La Pampa había sido formada a instancias de un grupo de dirigentes ganaderos que a comienzos de mayo de 1973, constituyó la entidad en una reunión en la localidad pampeana de Ingeniero Luiggi. De esta primera reunión participaron cinco corporaciones locales: la Sociedad Rural de Ingeniero Luiggi; la Sociedad Rural de General Pico, la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, la Asociación Rural de General Acha y la Asociación Rural y de Fomento Realicó.<sup>82</sup> Las cuatro primeras se encontraban adheridas a CARBAP, y la última se integraría a ella en el transcurso del siguiente año. Un rol destacado tuvo en la conformación de

<sup>77</sup> *La Nación*, 9/9/1973.

<sup>78</sup> *La Tierra*, 20/9/1973.

<sup>79</sup> *Cronista Comercial*, 4/10/1973.

<sup>80</sup> *Cronista Comercial*, 14/9/1973.

<sup>81</sup> *La Nación*, 27/6/1973.

<sup>82</sup> Aguado, Jorge. *Cuatro años de acción gremial*. CARBAP, Buenos Aires, 1977, pp. 49-50.

la Comisión Jorge Aguado, dirigente de Ingeniero Luiggi y prosecretario de CARBAP. Evidentemente, buscaba crear una estructura organizativa que diera resonancia a una serie de posiciones políticas sobre el proceso en curso que aún eran minoritarias incluso dentro de la corporación pampeana. Sin embargo, este grupo iría ganando influencia, imponiendo sus posiciones primero en CARBAP, posteriormente en CRA y de allí al conjunto de las corporaciones agropecuarias. El movimiento terminó colocando a Jorge Aguado como uno de los impulsores de la alianza que desde mediados de 1975 abogó por la clausura del régimen democrático. Con el golpe, Aguado ocupó cargos durante el gobierno dictatorial y llegó a ser gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. La Comisión de Enlace de La Pampa, en esos primeros meses de lucha en solitario, creció. Incorporó nuevas sociedades locales creadas a instancias del grupo de Aguado, que se irían sumando a CARBAP: Asociación Gremial Agropecuaria de Eduardo Castex, Sociedad Rural de Bernardo Larroudé, Asociación Gremial Agropecuaria del Centro Este Pampeano, Asociación Agrícola Ganadera del Sudoeste Pampeano y Asociación Gremial Agropecuaria del Oeste Pampeano.<sup>83</sup> CARBAP pasó de 22.000 afiliados que tenía en 1972, a 31.000 en 1976. En el mismo período, incorporaría 21 sociedades de primer grado, pasando de 71 afiliadas a 92.<sup>84</sup> Estos números son sin duda el resultado de la decidida acción contra el reformismo impulsada por Aguado y su grupo, en momentos en los que primaba el espíritu de “concertación”.

A comienzos de julio de 1973, la influencia de Aguado ya se hacía sentir en CARBAP, que emitió una declaración objetando todos los proyectos que el Ejecutivo había remitido al Congreso: “[son] leyes de control y de recaudación y no de impulso a la producción agropecuaria, ni fomentan una mayor tecnificación”.<sup>85</sup> Sobre las iniciativas respecto a la tenencia de la tierra, argumentaba que esos proyectos fomentarían “la colectivización agropecuaria al resolverse que las tierras en arrendamiento pueden ser entregadas a cooperativas”. El impuesto a la renta potencial era criticado por las altas tasas establecidas y las leyes de granos y carnes porque con el argumento de defender los precios, se establecían nuevas cargas para los productores. A su vez, denunciaba que detrás de la política de concertación se escondía una maniobra para subordinar a las entidades agropecuarias a la CGE.<sup>86</sup>

A los pocos días, CARBAP lanzó un proceso de movilización para agrupar las fuerzas de los sectores opuestos (y decididos a combatir), la política agropecuaria oficial. Propiciaba la realización de una serie de asambleas zonales, que confluían en el Congreso Anual de CARBAP, que se llevaría a cabo en agosto en la localidad de Trenque Lauquen. El reagrupamiento no se limitaba solo a las bases de la entidad, sino que realizaban un llamado abierto, a todos los sectores de la actividad, “para esclarecer y orientar la política que la producción agraria requiere, con el fin de asegurar al país una economía de

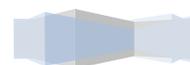
---

<sup>83</sup> *La Nación*, 25/6/1974.

<sup>84</sup> CARBAP. *Memoria y Balance 1973-1974*; CARBAP. *Memoria y Balance 1974-1976*; Margenat, Nidia. “Las organizaciones corporativas del sector agrario y su posición frente a la renta potencial”. *Cuadernos de CICOSO*, Serie Estudios nº 5, 1973.

<sup>85</sup> *La Nación*, 4/7/1973.

<sup>86</sup> *Idem*.



abundancia”. Propiciaba entonces “un gran movimiento de opinión de las bases productoras, en salvaguardia de las leyes de carnes y de granos [...], a fin de aprobar un pronunciamiento del Frente Verde, que inicie el planteo de fondo, de una política nacional agropecuaria permanente para el mediano y largo plazo”.<sup>87</sup> La convocatoria tenía como ejes la crítica a la política de precios, la disminución de la presión fiscal y el rechazo a las “amenazas” a la propiedad privada.

Como se ve, la negativa de CARBAP a suscribir el “Acta de Compromiso” expresaba una oposición de plano a la política agropecuaria peronista, que todavía era minoritaria. El grupo de Aguado ni siquiera podía influir decisivamente sobre CRA, que suscribió el Acta. Es que el clima político aun no daba para que los planteos de la dirigencia de CARBAP se extendieran hacia el resto de las corporaciones rurales. Aguado debió predicar un tiempo más en el desierto hasta que las cartas estuvieran a su favor. Sin embargo, ya entrado 1974 el clima político en el campo comenzó a cambiar. El mantenimiento de (y los intentos de elevar) los niveles de exacción de renta, que se habían presentado como una “contribución excepcional” aumentaba el malestar de las bases agrarias. A su vez, la Comisión de Política Concertada marchaba a los tumbos, ya que el gobierno hacía poco caso a los reclamos de las corporaciones agrarias y, en general, las disposiciones se instrumentaban incluso frente al rechazo unánime de los miembros de la comisión. Todo ello iría volcando progresivamente la situación a favor de los planteos de la dirección de CARBAP, que no disimulaba su oposición total a la política del gobierno.

La filtración a la prensa, en junio de 1974, del anteproyecto de Ley Agraria elaborado por el equipo de Giberti le permitió a la dirigencia de CARBAP acercar a sus posiciones a CRA, SRA y CONINAGRO. Aguado inició, tras la difusión del proyecto, una intensa campaña para descalificarlo. No dudó en tildar la iniciativa de “colectivista” y “marxista”, un proyecto que apuntaría a expropiar al conjunto de la burguesía terrateniente sin atenuantes. Se justificaba de esta manera la “cruzada” contra lo que, a ojos de Aguado, aparecían como “subversivos” infiltrados en el equipo de gobierno. Si se sumaba a esto la política fiscal y los precios establecidos oficialmente, no cabían dudas de que el objetivo del gobierno era, como señalaba un comunicado de CARBAP de noviembre de 1974, “perseguir [al campo], condenarlo a la ineficiencia y llevarlo al abandono, para luego proceder a la irracional subdivisión de la propiedad rural.”<sup>88</sup>

El cambio de clima permitió a Aguado y su grupo ganar, en julio de 1974, la dirección de CRA, desplazando a los sectores afines al gobierno, que incluso llegaron a bregar por que la entidad se incorpore a la CGE. Una vez conquistada la dirección de CRA, la nueva cúpula, siguiendo la línea marcada por Aguado, se retiró de los organismos de política concertada. Al poco tiempo, tomaron la misma actitud los representantes de SRA y CONINAGRO. La prédica de Aguado se iba imponiendo en el conjunto de las corporaciones rurales, y comenzaba a cobrar forma su proyecto de recrear un “Frente Verde” anti-reformista. Incluso en FAA ganaba terreno la línea opositora al gobierno.

<sup>87</sup> *La Nación*, 7/7/1973.

<sup>88</sup> *La Nación*, 13/11/1973.

La entidad, que se había lanzado abiertamente en defensa de la Ley Agraria, en la que veía la consumación de su vieja consigna de Revolución Agraria Integral, no pudo evitar las disidencias en su seno. En junio, Antonio Di Rocco renunció a la Comisión Directiva de la entidad para operar con las manos libres en el armado del frente propiciado por CARBAP. Ese mismo mes comenzó a reunirse una comisión, a la que se sumó Di Rocco, en la que se pusieron en discusión las bases de una “Confederación de Entidades Agropecuarias de la República Argentina”.<sup>89</sup> De la comisión participaron dirigentes renombrados de Sociedad Rural y CONINAGRO, junto a los hombres de Aguado en representación de CRA y CARBAP. Según expresaron en una solicitada, bregaban por la conformación de una central única para “terminar con la frustración del agro motivada por la ausencia de una acertada y coherente política agropecuaria.”<sup>90</sup> Es decir, para enfrentar la ofensiva reformista sobre el agro.

FAA, que concientemente se había marginado de esta iniciativa, la calificaba como la unión de “poderosos intereses” asentados en la producción agropecuaria, más preocupados por defender sus privilegios que por hacer los sacrificios necesarios para realizar las reformas que permitieran la pacificación del país.<sup>91</sup> Es que, con la difusión del anteproyecto de Ley Agraria, FAA había renovado sus votos de confianza en el gobierno peronista. No tanto por los beneficios que podría implicar para sus socios una reforma en la estructura de tenencia de la tierra, sino más bien por la necesidad política de realizar esas reformas. Volando admitía que la defensa de la “reforma agraria” respondía, más que a un interés sectorial, a la preocupación frente a la radicalización de las masas:

“Por que no queremos que subsista ni se agrave lo que nos está ocurriendo y porque no queremos que nos ocurra lo que les ocurre a nuestros vecinos, es que reclamamos con tanto énfasis y tanta energía medidas para poner coto a esta situación. Son ya muchos los argentinos, sobre todo los argentinos jóvenes, que han perdido la paciencia y la fe en una transformación de las estructuras en paz y en orden. Vemos con alarma demasiada gente a las columnas como Sansón, tratando de sacudirlas para derrumbar el templo. Si lo logran, hoy como entonces pagarán justos por pecadores. Hagámonos partícipes de las justas reivindicaciones y tendremos autoridad para frenar sus excesos. El tiempo nos corre, sepamos aprovecharlo. El sol se ha corrido hacia el poniente y no nos quedan muchas horas para realizar la tarea.”<sup>92</sup>

Atento a la situación social explosiva de la Argentina (y Latinoamérica) en estos turbulentos años, argumentaba que la reforma agraria era, en última instancia, la mejor forma de defender el derecho a la propiedad privada de la tierra.

---

<sup>89</sup> Denominación que utilizan en el único documento público elaborado por esta comisión, la solicitada publicada en *La Nación* el 10 de julio de 1974. La futura entidad unitaria también aparece en la prensa como “Confederación General Agropecuaria”, aunque cuando finalmente se conformó asumió el nombre de Comité de Acción Agropecuaria.

<sup>90</sup> *La Nación*, 10/7/1974.

<sup>91</sup> *La Tierra*, 3/10/1974.

<sup>92</sup> *La Tierra*, 23/5/1974.



Siguiendo este razonamiento, más propio de un burgués conciente del peligro que de un reformista convencido, Volando defendió el proyecto de Ley Agraria en intervenciones públicas y actos. FAA no movilizó grandes energías para conseguir su aprobación, aunque tampoco tenía mucho para ganar en términos económicos. Pero expresó su apoyo al gobierno en este punto, aún resignando sus reclamos por la presión fiscal y los precios insuficientes. Enfrentó incluso disidencias internas, y hasta el peligro de una escisión. Y esto la mantuvo alejada, por el momento, de la unidad con el resto de las corporaciones para salir al combate de una política que avanzaba fuertemente sobre una ganancia extraordinaria, la renta diferencial, cuya apropiación completa todas reivindicaban como un derecho inalienable.

La iniciativa unitaria emprendida por Aguado, sin embargo, demoró unos meses más en concretarse. Es que los sectores que, tanto dentro de CONINAGRO como de SRA, bregaban por no romper lanzas frente al gobierno, mantenían su peso aún. La propia CRA tuvo que soportar la desafiliación de sus entidades patagónicas en disidencia con la línea antireformista que ganaba peso de la mano de Aguado. Algunas concesiones del gobierno primero, y el recambio del equipo económico luego, con la salida de Gelbard y Giberti, enfriaron las negociaciones unitarias. Sin embargo, hacia fines de 1974 el “frente verde” terminó concretándose. La caída de los precios internacionales del ganado ya era una realidad, y se auguraba la misma suerte para los precios de los granos, que se derrumbarían en 1975. El nuevo equipo económico, por otro lado, no revirtió una política que se asentaba fuertemente en la transferencia de ingresos del agro hacia la industria y los asalariados urbanos. Más allá de las promesas, el peso de la “contribución” del agro a la economía se mantuvo, agravado proporcionalmente por los precios internacionales en baja. Esto reactivó las negociaciones, que derivaron finalmente en la conformación del Comité de Acción Agropecuaria, con la participación de CRA, SRA y CONINAGRO, en diciembre de 1974. Este comité fue el impulsor del primero de los cinco paros comerciales agrarios de alcance nacional de 1975, realizado en marzo.<sup>93</sup> Poco tiempo después, FAA se sumó al frente, siendo una de las principales animadoras de las movilizaciones del sector agrario en ese año crítico. Este frente, en donde se destacaba la figura de Jorge Aguado, asumió posiciones abiertamente golpistas en la segunda mitad del año. El agro se convirtió, de esta manera, en la cabeza de una ofensiva reaccionaria que apuntaba a generar las condiciones políticas necesarias para descargar sobre las masas el ajuste que imponía la realidad económica, marcada a fuego por una crisis cuyo detonante era la caída de los ingresos por renta diferencial.

## Conclusión

La crisis de régimen abierta en 1969, y el retorno de Perón luego de 18 años de proscripción y exilio, llevaron a un reacomodo en el mapa político. Las diferentes capas y fracciones de la burguesía, y las corporaciones que expresaban sus intereses, se movieron en función del nuevo contexto político,

<sup>93</sup>Ver Sanz Cerbino, Gonzalo. “Tiempos violentos. Los paros agrarios de 1975 y la estrategia golpista de la burguesía”. *Anuario CEICS*, N° 3, 2009. Edición digital disponible en: [www.razonyrevolucion.org/textos/Anuario\\_2009.pdf](http://www.razonyrevolucion.org/textos/Anuario_2009.pdf)

modificando posiciones políticas, entablando nuevas alianzas y sufriendo internamente la crisis que ello implicaba. Durante estos años observamos, en primer lugar, el resurgimiento de una alianza reformista relegada a un segundo plano en el período previo, aquel en que reinaba Krieger Vasena y sus aliados. A su vez, asistimos a la crisis de la alianza liberal-reaccionaria que sostenía al gobierno dictatorial, que comienza a resquebrajarse al compás de la crisis política. Ya para 1973, no había cabida en el espectro político para sus postulados. Muchos de los que otrora los habían sostenido, modificaron su discurso para sumarse a la fuerza social que se alzó con el gobierno tras el triunfo electoral. Otros, sumidos en disputas internas y con un clima político hostil a sus posiciones, debieron llamarse a silencio.

La alianza social reformista se apoyó, fundamentalmente, en las capas de la burguesía industrial más débil, que se beneficiarían de la recreación del mercado interno a través de transferencias de ingreso y una política proteccionista. La CGE era la corporación que mejor representaba a estos sectores. A medida que la crisis de régimen se profundizaba, y que la apertura democrática irrestricta aparecía como la mejor alternativa para reencauzar el descontento social, se sumaron al reformismo otras fracciones de la clase dominante. La UIA sufrió en carne propia la crisis de la alternativa liberal-reaccionaria, que se manifestó en el ascenso de una línea interna comandada por los capitales más débiles, que se hicieron con la dirección y llevaron a la corporación a posiciones afines a las del peronismo. También se sumó a la alianza FAA, que esperaba beneficiarse con la segmentación de la carga impositiva sobre el agro y propugnaba una reforma de la estructura de tenencia de la tierra que diera contención a la radicalización política de las masas. Luego del triunfo peronista, se acercaron también al reformismo sectores de la burguesía agraria de mayor tamaño, como las líneas internas de SRA y CRA que impulsaron los acuerdos con el nuevo gobierno.

La clase dominante se fracturó y surgió en su seno un conglomerado de intereses que operaron a favor de una apertura democrática “sin proscripciones ni vetos”. Es decir, para el retorno del peronismo al poder. Sin esta crisis en las alturas, sería difícil explicar la vuelta de Perón. ¿Qué elementos se encuentran detrás de este giro inédito en el que, muchos de los que habían impulsado el golpe contra Perón en 1955 y lo habían confinado al exilio, se alinearon para operar a favor del retorno? Varios son los elementos que permiten explicar esta situación. En primer lugar, el contexto político. Hacía por lo menos 20 años que el capitalismo argentino se debatía en una crisis de acumulación de la que ningún gobierno ni régimen había podido sacarlo. A su vez, los constantes ataques a las masas en cada intento de revolver la crisis económica habían llevado a una situación imposible de contener. El proceso de movilización social, que aparecía con espasmódicos estallidos insurreccionales, junto al crecimiento de la izquierda revolucionaria en comisiones internas sindicales, universidades y barrios, expresaban el profundo quiebre que se había producido en mayo de 1969. Un sector de las masas parecía haber perdido su fe en aquellos que hasta el momento habían intentado conducir los destinos del país. La conflictividad social y la violencia política ya no podían encauzarse ni con recambio de autoridades ni con promesas de “tiempos sociales”. Ni siquiera una apertura democrática como la de 1958 o la de 1963 parecía capaz

de contener el ascenso de la lucha de clases. Hacían falta soluciones drásticas, y así emergió la figura de Perón como la única alternativa para dar aire al capitalismo argentino.

Sin embargo, no es este el único elemento que explica el ascenso del programa reformista. El otro factor ineludible es la coyuntura económica que hizo viable el planteo peronista. El ascenso de los valores internacionales de las mercancías agrarias, que comenzó en 1972 y se extendió hasta fines de 1974, garantizó las divisas necesarias para dar viabilidad a un programa económico asentado en las transferencias del agro, que permitían recrear y proteger el mercado interno y a la burguesía que operaba en él. En este contexto, es fácil explicar por qué la burguesía industrial abrazó este programa. No solo porque de esa manera se lograba contener la crisis social y política, sino también porque para la mayoría de sus fracciones el plan económico era pura ganancia. La burguesía agraria, candidata a financiar el plan, fue por esta misma razón la más reacia a brindar su apoyo al retorno del peronismo. Sus fracciones más débiles, aquellas que podían aspirar beneficiarse de la segmentación de la “contribución”, fueron las primeras en virar sus posiciones al reformismo, aunque no sin resistencias internas. El resto solo se acercó cuando la pelea estaba ya perdida, y la coyuntura política no dejaba más alternativa.

Sin embargo, el armado peronista no tardó en entrar en crisis. Aunque logró contener la conflictividad social por cierto tiempo, no solo a fuerza de “transferencias” sino también echando mano a la violencia estatal y paraestatal, sus causas profundas seguían en pie. Así, cuando la bonanza económica desapareció, las tensiones contenidas estallaron nuevamente. El año 1975 fue crítico para el gobierno democrático. La caída abrupta de los precios agrarios puso en evidencia la fragilidad del conjunto. En primer lugar, se reactivó el frente opositor agropecuario, que comenzó un proceso de movilización que enturbiaba el clima político y desestabilizaba al gobierno. Por otro lado, sin las divisas provenientes del sector externo, el plan económico comenzó a resquebrajarse y esto puso sobre la mesa la necesidad de un ajuste. El gobierno intentó, con el Rodrigazo, descargar sobre las masas los costos de la crisis. Pero debió retroceder ante la reacción popular que desbordaba a la dirigencia sindical peronista y se acercaba, nuevamente, a la izquierda revolucionaria. Este hecho fue determinante en la relación del gobierno con la clase dominante. Varios sectores comenzaron a observar que el peronismo no podría ejecutar el ajuste necesario para restablecer la acumulación, y comenzaron a coquetear con las Fuerzas Armadas que resolverían el problema poniendo en caja a los que no aceptaran las “razones” de la economía. Resurgía así la alianza reaccionaria, que se nutrió de todas las capas de la burguesía agraria, y que fue sumando, entre mediados de 1975 y marzo de 1976, al resto de las capas y fracciones de la clase dominante. De esta manera concluiría la experiencia de un sector de la clase dominante con el peronismo, al que recurrieron cuando fue necesario, y del que se desprendieron cuando dejó de serlo.